

EL DERECHO A LA CIUDAD, ¿UN DERECHO JURÍDICAMENTE EXIGIBLE EN ARGENTINA?

THE RIGHT TO THE CITY, A LEGALLY DEMANDABLE RIGHT IN ARGENTINA?

Tamara Belén Rogers¹

RESUMEN

En la presente investigación se indagan los orígenes del derecho a la ciudad y se revisan las acepciones desarrolladas desde su instauración hasta la actualidad para luego poder realizar un análisis jurídico de sus fundamentos y contenido tanto en la normativa internacional como en la nacional (Argentina) para finalmente determinar la naturaleza de este derecho y establecer si es jurídicamente exigible en Argentina.

La metodología utilizada es la investigación documental, ya que a partir de la revisión de las fuentes documentales se elaboran reflexiones descriptivas, analíticas y hermenéuticas en relación con el objeto específico de la investigación.

Los resultados obtenidos permitieron visibilizar la problemática existente en cuanto a la exigibilidad del derecho a la ciudad, por lo que se procedió a elaborar una solución alternativa para su reclamo judicial en forma individual o colectiva en países, como Argentina, en los cuáles no se encuentra reconocido en instrumentos normativos vinculantes.

Palabras clave: Derecho a la ciudad – Exigibilidad – Derecho Humano Emergente – Derechos Humanos – Ciudad

ABSTRACT

In the present investigation, the origins of the right to the city are investigated and the meanings developed from its establishment to the present are reviewed, to then be able to carry out a legal

¹ Abogada por la Universidad Nacional de Mar del Plata (2013) y Doctoranda en Derecho en la misma casa de estudios. Especialista en Gestión Universitaria por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP (2017). Universidad Nacional de Mar del Plata – Argentina. ORCID Id: <https://orcid.org/0000-0002-9362-4992>
E-mail: tammyrogers1@hotmail.com

analysis of its foundations and content in both international and national regulations (Argentina) to finally determine the nature of this right and establish whether it is legally enforceable in Argentina. The methodology used is documentary research, since descriptive, analytical and hermeneutic reflections are elaborated from the review of the documentary sources in relation to the specific object of the research.

The results obtained allowed the existing problems regarding the enforceability of the right to the city to be made visible, so an alternative solution to their judicial claim was developed individually or collectively in countries, such as Argentina, where it is not found. recognized in binding regulatory instruments.

Keywords: Right to the city - Enforceability - Emerging Human Right - Human Rights – City

1. INTRODUCCIÓN

El sociólogo francés, Henri Lefebvre (1901-1991) fue el primero en acuñar el término ‘Derecho a la Ciudad’, concibiéndolo como una manifestación superior de los derechos humanos, y en el cual se encuentran imbricados diversos derechos como lo son el derecho a la libertad, a la individualización en la sociedad, al hábitat, al habitar, a la obra y a la apropiación (LEFEBVRE, 1968). Luego, numerosos autores continuaron estudiando y desarrollando este derecho, entre ellos: David Harvey (2013), Edward Soja (2000 y 2014) y Jordi Borja (2010).

En lo que hace a su regulación normativa, en los últimos años el derecho a la ciudad ha ido cobrando importancia y aceptación general a nivel mundial, siendo Latinoamérica precursora de este proceso (particularmente Brasil y Colombia).

Desde el año 2000 en adelante, diversos instrumentos internacionales comenzaron a reconocerlo (Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal, Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad y la Carta de Derechos Humanos de Gwangju).

En particular, la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad –elaborada por un número de organizaciones sociales, académicos y activistas, articulados dentro de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) – fue el primer instrumento internacional en reconocer expresamente al derecho a la ciudad.

Si bien la Carta no es un tratado internacional con fuerza vinculante para los Estados parte, la misma representa un trabajo conjunto, una construcción con posibilidades de adquirir estatus de obligatoriedad. Su importancia radica en que “(...) integra un esfuerzo importante por llevar el debate sobre el derecho a la ciudad a nivel internacional, como un derecho humano exigible y justiciable por sus titulares y responsabilidad de los gobernantes” (CORREA MONTOYA, 2010).

A nivel nacional, en Argentina no contamos con una legislación que regule al derecho a la ciudad expresamente como tal –como sí sucede a nivel provincial con la Ley de Acceso Justo al Hábitat N° 14449 de la provincia de Buenos Aires–, pero la Constitución y diversos tratados internacionales con fuerza vinculante reconocen los derechos humanos que lo integran.

A partir de lo expuesto es que se ha clasificado al derecho a la ciudad como un derecho humano emergente, por cuanto es una aspiración de derechos que si bien no ha sido explícitamente recogido en textos jurídicos vinculantes, constituye una respuesta coherente y jurídicamente viable a los retos y necesidades de las sociedades contemporáneas (SAURA ESTAPÀ, 2010).

En este orden de ideas y en base al planteo efectuado por Correa Montoya es que nos preguntamos, ¿es el derecho a la ciudad un derecho humano exigible y justiciable por sus titulares en Argentina?

Para poder responder a ello, se realizará una investigación jurídica en la que se comenzará por indagar los orígenes del derecho a la ciudad y revisar las acepciones desarrolladas desde su instauración por el sociólogo francés Henri Lefebvre hasta la actualidad. Una vez conocidas las diversas definiciones elaboradas de este derecho, analizaremos sus fundamentos normativos internacionales y nacionales para finalmente poder determinar si es jurídicamente exigible en Argentina.

La metodología que se utilizará es la investigación documental, ya que a partir de la revisión de las fuentes documentales se elaborarán reflexiones descriptivas, analíticas y hermenéuticas en relación con el objeto específico de la investigación. Para el presente estudio se revisaron, principalmente, las siguientes fuentes documentales: obras de los principales exponentes del derecho a la ciudad e instrumentos normativos internacionales y nacionales (Argentina). Como eje

central se utilizó la definición del derecho a la ciudad otorgada por la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.

2. DESARROLLO

2.1 Origen y definiciones del derecho a la ciudad lo largo de la historia

En los últimos años el derecho a la ciudad ha ido cobrando importancia y aceptación general a nivel mundial, principalmente en los países con capitalismo más desarrollado, pero ¿cuál es su origen?

El sociólogo francés, Henri Lefebvre (1901-1991) fue el primero en acuñar el término en el año 1968 en el libro titulado “El derecho a la ciudad”. En esta obra explica que la vida urbana de por sí supone confrontaciones ideológicas y políticas que coexisten en la ciudad y que, a lo largo del siglo XIX, la democracia de origen campesino hubiera podido transformarse en democracia urbana pero, como se veían amenazados los privilegios de la nueva clase dominante, ésta última impidió su nacimiento expulsando al proletariado del centro urbano y de la ciudad, destruyendo de esta manera la ‘urbanidad’ (LEFEBVRE, 1968).

Lefebvre relaciona directamente el concepto de democracia con la ciudad al señalar que “(...) el carácter democrático de un régimen se mide por su actitud hacia la ciudad, las ‘libertades’ urbanas, la realidad urbana, y por consiguiente hacia la segregación” (LEFEBVRE, 1968).

En este contexto concibe al derecho a la ciudad como aquel derecho que tiene como finalidad conseguir que todos los ciudadanos puedan encontrarse y reunirse, para así poder lograr la reconstitución de una unidad espacio-temporal como oposición a la fragmentación ocasionada por la riqueza y el poder.

En su siguiente obra explica que este derecho es una manifestación superior de los derechos humanos en el cual se encuentran imbricados diversos derechos como lo son el derecho a la libertad, a la individualización en la sociedad, al hábitat, al habitar, a la obra y a la apropiación (LEFEBVRE, 1968).

Pero el estudio del derecho a la ciudad del autor en cuestión no finalizó allí, en posteriores obras destaca su importancia al señalar que se encuentra equiparado a los derechos reconocidos en la Declaración de los Derechos del Hombre, los cuales, no son siempre literalmente cumplidos pero sirven como vara para evaluar la situación de la sociedad (LEFEBVRE, 1976). De esta manera vuelve a

hacer hincapié en el análisis del cumplimiento del derecho a la ciudad como forma de poder establecer el carácter democrático de un régimen.

Con respecto a su naturaleza, señala Lefebvre que el derecho a la ciudad no es un derecho natural como así tampoco contractual, sino que es el derecho de los ciudadanos “(...) a figurar en todas las redes y circuitos de comunicación, de información, de intercambios” (LEFEBVRE, 1976).

Ahora bien, el citado autor hace especial referencia a un grupo en particular de personas al hablar del derecho a la ciudad, esto es, los ciudadanos segregados, por cuanto según el mismo, el derecho a la ciudad propicia que los ciudadanos discriminados puedan rechazar el apartamiento de la realidad urbana que sufren al no tener participación en los privilegios políticos como consecuencia de no encontrarse entre quienes están en los centros de decisión, de riqueza, de poder, de información o de conocimiento.

A partir del derecho a la ciudad se intenta que –sin eliminar las confrontaciones y las luchas–, los lugares y objetos pasen a responder a determinadas necesidades que generalmente no son tenidas en cuenta o que son menospreciadas por las clases dominantes (LEFEBVRE, 1976).

¿Y cómo se logra? Para ello, Lefebvre propone que se conciba al socialismo como producción orientada hacia las necesidades sociales y, por ende, hacia las necesidades de la sociedad urbana; superando de esta manera los objetivos tomados de la industrialización; aclarando además que deben darse tres condiciones que según el mismo, están realizadas en los grandes países industrializados, a saber: un elevado nivel de producción y productividad, un alto nivel técnico y cultural y, la institución de relaciones sociales nuevas, en particular entre gobernantes y gobernados (LEFEBVRE, 1968).

Continuando con el análisis de las diversas definiciones del derecho a la ciudad a lo largo de la historia, el geógrafo y teórico británico David Harvey explica que este derecho ha experimentado cierto resurgimiento durante la última década, pero no atribuye ello al legado intelectual de Henri Lefebvre; sino que se lo imputa a la acción de los movimientos sociales urbanos que han venido luchando por él (HARVEY, 2013).

Señala que la idea del derecho a la ciudad “no surge primordialmente de diversas fascinaciones y modas intelectuales (aunque también las haya, evidentemente), sino de las calles, de los barrios, como un grito de socorro de gente oprimida en tiempos desesperados” (HARVEY, 2013).

Harvey intenta enfocar este derecho desde una perspectiva revolucionaria y no solo reformista, pero explica que esta perspectiva revolucionaria se ve dificultada de alcanzar hoy en día

debido a que en gran parte del mundo capitalista avanzado, las fábricas han disminuido considerablemente, diezmando de esta manera la clase obrera industrial clásica (HARVEY, 2013).

Debido a este fenómeno, la tarea de crear y mantener la vida urbana es realizada cada vez más por trabajadores eventuales, generalmente a tiempo parcial, desorganizados y mal pagos. Es por ello que el problema político reside en cómo se pueden autoorganizar y convertirse en una fuerza revolucionaria estos grupos tan diversos (HARVEY, 2013).

Con respecto al contenido del derecho a la ciudad, señala que este es un significativo vacío y que depende de quién lo llene y con qué significado; por lo que “la definición del derecho es en sí mismo objeto de una lucha que debe acompañar a la lucha por materializarlo” (HARVEY, 2013). El derecho a la ciudad es más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que la ciudad almacena o protege; es el derecho a cambiar y reinventar la misma de acuerdo con nuestros deseos. Esto es, es el derecho a ejercer un poder colectivo sobre el proceso de urbanización (HARVEY, 2013).

La problemática actual consiste en que el derecho a la ciudad va cayendo cada vez más en manos de intereses privados, por lo que es desvirtuado, encontrándose en la mayoría de los casos en manos de una pequeña elite política y económica, que configura la ciudad según sus deseos y necesidades (HARVEY, 2013).

Explica Harvey que “el socialismo en una sola ciudad no es un concepto viable, pero es en las ciudades donde se concentran las condiciones para la producción y apropiación de rentas de monopolio, en términos de inversiones físicas y de movimientos culturales” (HARVEY, 2013) y; debido a la relevancia que presentan las ciudades es que la alternativa a la forma actual de globalización debe justamente provenir de los espacios urbanos (HARVEY, 2013).

Sumado a ello, señala que resulta necesaria una reivindicación de los derechos de los desposeídos a su ciudad, a cambiar el mundo y a reinventar la ciudad de acuerdo con sus propios deseos (HARVEY, 2013). Todos aquellos cuyo trabajo está dedicado a producir y reproducir la ciudad son los que tienen el derecho colectivo a disponer de lo que producen, y a decidir qué tipo de urbanismo se debe producir, dónde y cómo (HARVEY, 2013).

En este contexto explica que el derecho a la ciudad es un derecho colectivo concentrado, por cuanto no solo incluye a los trabajadores de la construcción sino también a todos aquellos “que facilitan la reproducción de la vida cotidiana” (HARVEY, 2013).

Y agrega además que este derecho debe plantearse

(...) como un derecho a reconstruir y recrear la ciudad como un cuerpo político socialista con una imagen totalmente diferente, que erradique la pobreza y la desigualdad social y que cure las heridas de la desastrosa degradación medioambiental. Para que esto suceda habrá que interrumpir la producción de las formas destructivas de urbanización que facilitan la perpetua acumulación de capital (...) (HARVEY, 2013).

Está convencido de que para construir la ciudad socialista sobre la destructiva urbanización capitalista son necesarios dos factores, una revolución en el pensamiento y la práctica anticapitalista.

El geógrafo y urbanista estadounidense, Edward Soja, en su obra 'Postmetrópolis: estudios críticos sobre las ciudades y las regiones' (2000) toma como objeto de estudio la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, para intentar comprender el rumbo adoptado por los procesos de urbanización en las últimas décadas y de esta manera poder pensar alternativas para la construcción de una sociedad más justa.

Soja explica que a comienzos de este siglo se tomó una nueva perspectiva a partir de la cual se entiende que existe una simultánea y compleja interrelación de las dimensiones social, histórica y espacial de nuestras vidas, que resultan ser inseparables e interdependientes. "(...) La vida humana es consecuentemente, y consecuentemente, espacial, temporal y social, simultánea e interactivamente real e imaginaria" (SOJA, 2014).

A partir de lo que él llamó dialéctica del ser, logró un redescubrimiento de la geohistoria del espacio urbano (SOJA, 2000), tomando una perspectiva explícitamente espacial o geográfica acerca de la producción de conocimiento práctico.

Pero, ¿qué entiende Soja por espacialidad? La espacialidad de la vida humana es un producto social complejo, una configuración del espacio creada y decidida colectivamente y que define nuestro hábitat contextual (SOJA, 2014).

Dicho concepto de 'espacialidad' se encuentra íntimamente relacionado con el de 'justicia espacial', toda vez que la justicia tiene consecuencias geográficas por cuanto "(...) la búsqueda de la justicia espacial deviene fundamentalmente, casi inevitablemente, una lucha por la geografía (...) (SOJA, 2014).

Refiere Soja que la urbanización y la condición urbana tienen un papel central en la búsqueda de la justicia espacial: "En este sentido, el mundo en su conjunto ha sido o está siendo urbanizado

hasta cierto punto, dando relevancia a la búsqueda de la justicia espacial en diferentes escalas geográficas, desde la más global a la más local, y en medio, en todas partes.” (SOJA, 2014).

Continúa explicando que esta visión amplia del proceso de urbanización conecta la búsqueda de la justicia espacial con las luchas por el derecho a la ciudad.

Y, ¿qué entiende Soja por derecho a la ciudad? Este derecho es una idea cargada políticamente sobre Derechos Humanos en un contexto urbano, que fue creada originalmente por Henri Lefebvre. Dicho concepto original consistía en ideas sobre la geografía emergente de la vida urbana y la necesidad de los más afectados por la condición urbana de tomar un mayor control sobre la producción social del espacio urbano.

Pero, ¿cómo es que los conceptos de derecho a la ciudad y justicia espacial se relacionan? El interpretar la lucha por el derecho a la ciudad como una reivindicación de mayor control sobre cómo los espacios en que vivimos son producidos socialmente sin importar en dónde estén, “se transforma virtualmente en sinónimo de búsqueda de justicia espacial” (SOJA, 2014).

La búsqueda de la justicia espacial y la regionalización del derecho a la ciudad, resultan necesarios en un mundo urbanizado y globalizado en el cual “(...) la urbanización de la injusticia y la globalización de la injusticia se refuerzan mutuamente para crear lo que probablemente sean las mayores desigualdades espaciales de riqueza y poder que el mundo haya visto nunca” (SOJA, 2014).

Si bien Soja no hace expresa referencia acerca de los grupos discriminados y desposeídos (como lo hacen Lefebvre y Harvey), propicia una práctica política que intente reducir las opresiones y las desigualdades de clase, raza y género (SOJA, 2000), tomando como guía para sus críticas sobre las ciudades el cumplimiento o no de los objetivos de justicia espacial y democracia regional, sin dejar de atender a los enfoques críticos sociales e históricos.

En el libro “Conversaciones sobre el Derecho a la Ciudad” (2007) editado por Fabio Enrique Velásquez Carrillo se reflejan las discusiones adelantadas en el seminario interno sobre el concepto del Derecho a la Ciudad, organizado durante el año 2006 por la Mesa por el Derecho a la Ciudad en Bogotá, Colombia. Allí se explica que el derecho a la ciudad comprende el derecho a construir una ciudad en la que sea posible vivir dignamente, reconocerse como parte de ella, convivir con los diferentes e incidir en su destino (VELÁSQUEZ CARRILLO, 2007).

El derecho a la ciudad permite no solo acceder a las libertades urbanas sino también construir y hacer ciudad en pos de lograr una distribución equitativa de los recursos materiales

(salud, educación, vivienda) y simbólicos (acceso a la información, intercambio comunal y participación ciudadana) (VELÁSQUEZ CARRILLO, 2007).

A partir del derecho en cuestión es que se busca recuperar la capacidad deliberativa, de organización, de presión y de exigibilidad social y política que tienen los ciudadanos, haciendo especial hincapié en los sectores discriminados y en aquellos que no pueden hacer efectivos sus derechos económicos, sociales y culturales (VELÁSQUEZ CARRILLO, 2007).

En este contexto es que se establece que el derecho a la ciudad es un derecho complejo, integral e independiente que abarca las diferentes dimensiones de la vida urbana por cuanto incluye: 1) el derecho a un hábitat que facilite el tejido de relaciones sociales y simbólicas; 2) el derecho a sentirse parte de la ciudad, a la cohesión socio-cultural y a la construcción permanente de la identidad colectiva, respetando las diferencias, la intimidad, la elección de vínculos y redes personales; 3) el derecho a vivir dignamente en la ciudad, a ejercer la ciudadanía social, a la igualdad de oportunidades frente a la redistribución de los recursos materiales, a la justicia local y a la seguridad; 4) el derecho a la convivencia, a establecer múltiples nexos sociales en diferentes escalas, a crear espacios de encuentro y asociatividad, a interesarse por el otro diferente, a aceptar y tramitar el conflicto como parte de las relaciones cotidianas; 5) el derecho al gobierno de la ciudad respetándose el derecho a tener el mismo estatus jurídico-político de ciudadano y por lo tanto igualdad de derechos y responsabilidades, el derecho de los ciudadanos a participar en las decisiones públicas, a ser gobierno, a intervenir en el desarrollo y la planeación del futuro de la ciudad, a la innovación política y democrática en términos de sistemas electorales, mecanismos de participación, instrumentos de planeación y gestión, a un gobierno cercano y a las tecnologías de la información y la comunicación TIC y; 6) el derecho a proyectarse como ciudad hacia el entorno inmediato y hacia el mundo mediante estrategias diversas, a conformar redes regionales e internacionales y a incidir en las decisiones de organismos nacionales e internacionales que afectan la vida de la ciudad (VELÁSQUEZ CARRILLO, 2007).

El profesor español/catalán Jordi Borja, refiere que el derecho a la ciudad es un conjunto de derechos formales y materiales que configuran la ciudadanía y que no pueden ser dejados de lado, tales como son los llamados derechos urbanos: a la vivienda y al lugar elegido para vivir, a la calidad del espacio público, a la monumentalidad, a la preservación y mejora del ambiente y del patrimonio, a la diversidad de servicios y equipamientos, a la permanencia en el lugar y al cambio de residencia, a la movilidad y a la centralidad cercana, a la accesibilidad, a la visibilidad, integración en el tejido

urbano y al reconocimiento de poblaciones y territorios. A ellos se agregan los derechos socioeconómicos y culturales: a la educación y a la formación continuada, a la seguridad en todas sus dimensiones, al empleo y al salario ciudadano y a la identidad cultural específica de colectivos sociales y lugares. Y otros políticos: a la igualdad política y jurídica de todos los habitantes con independencia de la nacionalidad (ciudadanía residencial), a la participación ciudadana de todos tanto en los procesos de elaboración de las políticas públicas como en su seguimiento o ejecución, a la gestión de proximidad, a la adecuación de las instituciones a los ámbitos correspondientes a las funciones y actuaciones que requieren las actuales ciudades metropolitanas, al gobierno democrático de la ciudad metropolitana y a la gestión descentralizada o de proximidad, al refugio y al acceso universal a los bienes y servicios de interés general.

A diferencia de los autores anteriormente desarrollados, Borja no conceptualiza a los derechos universales que incluye el derecho a la ciudad como derechos humanos, sino que los denomina ‘derechos ciudadanos’, por cuanto considera que los mismos forman parte del estatuto de ciudadanía y ello implica “(...) reconocer a la persona como sujeto de derechos y deberes que la hacen libre en el territorio donde ha elegido vivir e igual a todas las demás personas que conviven en ese territorio” (BORJA, 2010).

La importancia del derecho a la ciudad, según Borja, radica en que este derecho permite interpretar la realidad y guiar la acción para transformarla, convirtiéndose el mismo una respuesta democrática que integra simultáneamente tanto los derechos de los ciudadanos como los criterios urbanísticos.

Es por ello que los gobiernos no sólo deben estimular el desarrollo político y cultural del concepto de derecho a la ciudad, sino que deben hacer de él su principio fundamental, propiciando el cumplimiento de todos los derechos que integran el derecho a la ciudad, por cuanto son todos indispensables a la vez para ejercer realmente la ciudadanía.

Así las cosas, Borja sostiene que, a partir de una crítica a las actuales dinámicas urbanas, el derecho a la ciudad permite evaluar la evolución de las ciudades, la calidad democrática de las políticas públicas y orientar y marcar el horizonte de los movimientos sociales democratizadores.

El abogado Lucas Correa Montoya, hace hincapié en el carácter colectivo del derecho a la ciudad al explicar que integra un interés colectivo y que está referido a un sujeto colectivo, los ciudadanos. Sintetiza su contenido desde tres facetas: “ (a) el usufructo equitativo de lo que la ciudad tiene para ofrecer a sus habitantes, (b) el mandato de construcción colectiva y participativa

de los asuntos de ciudad y (c) el goce efectivo de los derechos humanos en los contextos urbanos” (CORREA MONTTOYA, 2010).

La licenciada en Ciencias Físicas y máster en Relaciones Internacionales, Aida Guillén Lanzarote, formula una definición del derecho a la ciudad haciendo especial énfasis en el respeto de los derechos humanos al establecer que:

El derecho a la ciudad es el derecho de toda persona a vivir en un espacio colectivo, urbano o rural, con una administración local elegida democráticamente que tenga en el centro de sus políticas públicas el respeto de los derechos humanos de todos sus habitantes, asegurando así la plena realización de su vida política, social, económica y medioambiental (GUILLÉN LANZAROTE, 2011).

Finalmente, Aitor Luengo Martínez en su tesis doctoral, y a diferencia de Lucas Correa Montoya, explica que:

El derecho a la ciudad es un derecho igualmente individual y colectivo, de naturaleza variable, ajustable, veremos, a las particularidades de cada conjunto urbano, así entendido, y es que el derecho a la ciudad es un derecho vehículo o instrumento que aglutina la consecución de todos los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales (MARTÍNEZ, 2015).

2.2 Fundamentos Normativos del Derecho a la Ciudad

Ahora que ya conocemos en profundidad las diversas definiciones del derecho a la ciudad elaboradas a lo largo de la historia, podemos pasar de la visión filosófica y política el derecho a la ciudad a una visión puramente jurídica, para poder determinar su contenido en concreto.

El derecho a la ciudad encuentra sus orígenes como derecho en la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, que, si bien no lo reconoce expresamente como tal, en el artículo 1 establece que:

1. La ciudad es un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes que tienen derecho a encontrar las condiciones para su realización política, social y ecológica, asumiendo deberes de solidaridad.
2. Las autoridades municipales fomentan, por todos los medios de que disponen, el respeto de la dignidad de todos y la calidad de vida de sus habitantes (CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD, 2000).

La Carta Mundial del Derecho a la Ciudad fue el primer instrumento internacional en definir el derecho a la ciudad:

(...) el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos.

Esto supone la inclusión de los derechos al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias; a fundar y afiliarse a sindicatos; a seguridad social, salud pública, agua potable, energía eléctrica, transporte público y otros servicios sociales; a alimentación, vestido y vivienda adecuada; a educación pública de calidad y la cultura; a la información, la participación política, la convivencia pacífica y el acceso a la justicia; a organizarse, reunirse y manifestarse. Incluye también el respeto a las minorías y la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural y el respeto a los migrantes.

El territorio de las ciudades y su entorno rural es también espacio y lugar de ejercicio y cumplimiento de derechos colectivos como forma de asegurar la distribución y el disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sustentable de los recursos, riquezas, servicios, bienes y oportunidades que brindan las ciudades. Por eso el Derecho a la Ciudad incluye también el derecho al desarrollo, a un medio ambiente sano, al disfrute y preservación de los recursos naturales, a la participación en la planificación y gestión urbana y a la herencia histórica y cultura (CARTA MUNDIAL DEL DERECHO A LA CIUDAD, 2004).

Si bien el citado instrumento no es un tratado internacional con fuerza vinculante para los Estados parte, representa un trabajo conjunto, una construcción, con posibilidades de adquirir estatus de obligatoriedad.

La importancia del reconocimiento del derecho a la ciudad en la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, radica en que la misma "(...) integra un esfuerzo importante por llevar el debate sobre el derecho a la ciudad a nivel internacional, como un derecho humano exigible y justiciable por sus titulares y responsabilidad de los gobernantes" (CORREA MONTOYA, 2010).

Finalmente, ya no en una Carta, sino en una Declaración, la Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, se reconoce el contenido del derecho a la ciudad al establecer en el artículo 7 que el mismo comprende, entre otros derechos, el Derecho a la democracia participativa, y

que aquél “(...) asegura que todos los seres humanos y toda la comunidad encuentran en la ciudad las condiciones para su realización política, económica, social, cultural y ecológica (...)” (DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS EMERGENTES, 2004).

Luego de ellas, numerosas Cartas empezaron a mencionar el derecho a la ciudad o al menos a realizar un énfasis en lo que se entiende por ‘ciudad’ y la importancia de la misma.

La Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal en su artículo primero señala que “La ciudad constituye un territorio y un lugar de convivencia donde se debe promover la dignidad e integridad humanas, así como la tolerancia, la paz, la inclusión y la igualdad entre todas las ciudadanas y todos los ciudadanos” (CARTA DE DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DE MONTREAL, 2006).

La Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad en el artículo 1.1 define expresamente al derecho a la ciudad como:

(...) el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en el respeto a sus diferencias, expresiones y prácticas culturales, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y a un nivel de vida adecuado. El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos integralmente, e incluye, por tanto, todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales reglamentados en los tratados internacionales de derechos humanos (CARTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL DERECHO A LA CIUDAD, 2010).

En igual sentido, la Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad menciona en el artículo 1.a que: “Todas las personas que habitan en la ciudad tienen derecho a una ciudad constituida como comunidad política municipal que asegure condiciones adecuadas de vida a todos y todas y que procure la convivencia entre todos sus habitantes y entre estos y la autoridad municipal” (CARTA-AGENDA MUNDIAL DE DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD, 2011).

Finalmente, la Carta de Derechos Humanos de Gwangju en el principio 1 indica que:

La ciudad por los derechos humanos respeta todos los derechos humanos reconocidos por los correspondientes principios y normas internacionales vigentes en materia de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos y las constituciones nacionales. La ciudad por los derechos humanos trabaja para conseguir el reconocimiento y la implementación del derecho a la ciudad en consonancia con los principios de justicia social,

igualdad, solidaridad, democracia y sostenibilidad (CARTA DE DERECHOS HUMANOS DE GWANGJU, 2012).

A nivel regional, Brasil, Colombia y México reconocieron el derecho a la ciudad en sus respectivas legislaciones.

Brasil en el artículo 182 de su Constitución establece que: “La política de desarrollo urbanístico, ejecutada por el Poder Público Municipal, de acuerdo con las directrices generales fijadas en la ley, tiene por objeto ordenar el pleno desarrollo de las funciones sociales de la ciudad y garantizar el bienestar de sus habitantes.” (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, 1988).

En Colombia, la Ley 388 de 1997 no es una ley sobre el derecho a la ciudad pero vislumbra algunas de las bases necesarias para la efectivización de este derecho al establecer en su artículo 1 como objetivos:

- (...) 2. El establecimiento de los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes.
- 3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres.
- 4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.
- 5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en forma coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo de dicha política (LEY 388, 1997).

La Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 12 reconoce expresamente el derecho a la ciudad al establecer que:

- 1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia

social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente.

2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2017).

2.3 Regulación legal del derecho a la ciudad en Argentina

En Argentina, la provincia de Buenos Aires es la única que ha reconocido el derecho a la ciudad en la Ley de Acceso Justo al Hábitat N° 14449, al decir el artículo 11:

Derecho a la Ciudad y a la Vivienda. Todos los habitantes de la Provincia tienen garantizado el derecho al uso y goce de la ciudad y de la vivienda, entendiendo a éstos como el derecho a:

- a) Un lugar adecuado para vivir en condiciones que favorezcan la integración plena a la vida urbana.
- b) Acceder a los equipamientos sociales, a las infraestructuras y a los servicios.
- c) Desenvolver apropiadamente las actividades sociales y económicas.
- d) Usufructuar de un hábitat culturalmente rico y diversificado. (LEY DE ACCESO JUSTO AL HÁBITAT N° 14449, 2012).

Si bien a nivel nacional, en Argentina el derecho a la ciudad no se encuentra expresamente reconocido como tal, a través del análisis de las diversas definiciones y sus fundamentos normativos, hemos advertido que se encuentra integrado por diversos derechos, a saber: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales; los cuales ya se encuentran garantizados en diversas leyes nacionales y en tratados internacionales de derechos humanos.

Es por ello que, a los fines de poder entender de manera más acabada en qué consiste el derecho a la ciudad, enumeraremos los derechos que integran al mismo (siguiendo la definición otorgada por la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad), identificando su regulación normativa en instrumentos internacionales y en Argentina.

DERECHO	REGULACIÓN EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES	REGULACIÓN ARGENTINA
EL DERECHO AL	• Declaración Universal de Derechos	• Constitución Nacional

TRABAJO CONDICIONES EQUITATIVAS SATISFACTORIAS	EN Y <p>Humanos, artículos 23 y 24.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XIV. • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 6 y 7. • Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 5. • Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, artículo 11. • Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador), artículos 6 y 7. • Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 1. • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 27. 	<p>Argentina, artículos 14 y 14 bis.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. • Estatutos profesionales. • Convenios Colectivos de Trabajo. • Leyes de seguridad social y de accidentes de Trabajo.
A FUNDAR AFILIARSE SINDICATOS	Y A <p>• Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 23 inciso 4.</p> <p>• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XXII.</p> <p>• Organización Internacional del Trabajo, convenios: C087 - Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948), C098 - Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949) y el C135 - Convenio sobre los representantes de los trabajadores (1971).</p> <p>• Convención Europea de Derechos Humanos, artículo 11.</p> <p>• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 5.</p> <p>• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 22.</p> <p>• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 8.</p> <p>• Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 16.</p>	<p>• Constitución Nacional, artículo 14 bis.</p> <p>• Ley N° 23.071 de Asociaciones Profesionales de Trabajadores (1984)</p> <p>• Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales (1988).</p>

<p><u>A LA SEGURIDAD SOCIAL</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 27 inciso c. • Organización Internacional del Trabajo ha garantizado este derecho principalmente a través de: la Declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (Declaración de Filadelfia) (1944), la R067 - Recomendación sobre la seguridad de los medios de vida (1944), el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima) (1952), el C118 - Convenio sobre la igualdad de trato (seguridad social) (1962), el C121 - Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales (1964), el C157 - Convenio sobre la conservación de los derechos en materia de seguridad social (1982) y la R202 - Recomendación sobre los pisos de protección social (2012), entre otras. • Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 22. • Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XVI. • Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 5. • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 9. • Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social, artículo 11. • Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 14 inc. 2 c). • Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador), artículo 9. • Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 26. • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 28 inc. 2. • Constitución Nacional Argentina, artículo 14 bis. • Ley N° 23.157 Previsión Social (1984). • Ley 24.241 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (1993). • Ley 24.463 Solidaridad Previsional (1995). • Ley 24.714 Régimen de Asignaciones Familiares (1996). • Ley 24.977 Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (1998). • Ley 25.994 Seguridad Social (2004). • Ley 26.063 Recursos de la Seguridad Social (2005). • Ley 26.377 Seguridad Social (2008). • Ley 26.425 Sistema Integrado Previsional Argentino (2008). • Ley 27260 Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados (2016). • Ley 27541 Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública (2019)
-------------------------------------	--

A LA SALUD PÚBLICA

- Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25 inciso 1.
- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XI.
- Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 5.
- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12.
- Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 14 inciso 2 b).
- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador), artículo 10.
- Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 24.
- Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 1.5.
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 25.
- Constitución Nacional, artículo 42.
- Ley 22.431 Sistema de protección integral de los discapacitados (1981).
- Ley 23.660 Obras sociales (1989).
- Ley 23.661 Sistema Nacional del Seguro de Salud (1989).
- Ley 23.753 Salud Pública (Diabetes) (1989, modificada por la ley 23.753 en el año 2013).
- Ley 23.798 Salud Pública (Lucha contra el SIDA) (1990).
- Ley 24.091 Sistema de Prestaciones Básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las Personas con Discapacidad (1997).
- Ley 24.788 de Lucha contra el Alcoholismo (1997).
- Ley 25.404 Salud Publica (Protección para las personas que padecen epilepsia) (2001).
- Ley 25.415 Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia (2001).
- Ley 25.501 Salud Pública (Prioridad sanitaria del control y prevención de las enfermedades cardiovasculares).
- Ley 25.649 Especialidades Medicinales (Genéricos) (2002).
- Ley 25.673 Salud Pública (Salud Sexual y Procreación responsable) (2002).
- Ley 25.871 Migraciones (2004).
- Ley 25.929 Salud Pública (Embarazo, parto y post parto. Prestaciones y derechos) (2004).
- Ley 26.061 Protección

integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

- Ley 26.130 Régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica (2006).
- Ley 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral (2006).
- Ley 26.396 Trastornos alimentarios (2008).
- Ley 26.485 Protección integral a las mujeres (2009).
- Ley 26.529 Salud Pública (Derechos del paciente) (2009, modificada por la ley 26.742 del año 2012).
- Ley 26.588 Salud Pública (Enfermedad celíaca) (2009, modificada por la ley 27.196 en el año 2015).
- Ley 26.657 Salud Pública (Salud mental) (2010).
- Ley 26.682 Medicina prepaga (2011).
- Ley 26.687 Tabaco (2011).
- Ley 26.688 Salud Pública (Interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos).
- Ley 26.689 Salud Pública (Enfermedades poco frecuentes) (2011).
- Ley 26.743 Identidad de género (2012).
- Ley 26.862 Reproducción medicamente asistida (2013).
- Ley 26.872 Salud Pública (Patología mamaria. Cirugía reconstructiva. Cobertura) (2013).
- Ley 26.905 Alimentos (Consumo de sodio. Valores Máximos) (2013).

	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 26.928 Trasplantes (2014). • Ley 26.934 Plan Integral Para El Abordaje De Los Consumos Problemáticos (2014). • Ley 27.159 Salud (Muerte Súbita. Sistema de Prevención Integral) (2015). • Ley 27.197 Salud (Lucha Contra el Sedentarismo) (2015). • Ley 27.447 Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (2018).
<p><u>AL AGUA POTABLE</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 14 inc. 2. • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 28 inc. 2 a) • Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 24 • Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 1. • Resolución 64/292 de las Organización de las Naciones Unidas. • Declaración de Asunción para el Cuadragésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA: “Desarrollo Con Inclusión Social”. • Constitución Nacional, artículo 41. • Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 240. • Ley N° 21.172. • Ley 25.612. • Ley 25.688. • Ley 26.331. • Ley 26.639. • Constitución de la provincia de Buenos Aires, artículo 28. • Ley N° 11.723 de la provincia de Buenos Aires, Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. • Código de Aguas de la provincia de Buenos Aires, Ley 12257.
<p><u>A LA ENERGÍA ELÉCTRICA</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 14.2. • Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 1. • Ley 15.336 Ley de Energia Elctrica (1960). • Ley N° 17.004 Electricidad y Combustibles (1966). • Ley N° 24.065 Régimen de la Energia Elctrica (1992). • Ley 25.019 Régimen Nacional de Energía Eolica y Solar (1998). • Ley 26.190 Energía Eléctrica (2006). • Ley 27191 Energía Eléctrica (2015) Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía

<p><u>AL TRANSPORTE PÚBLICO Y OTROS SERVICIOS SOCIALES</u></p>	<p>Eléctrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley 27351 Salud Pública (Electrodependientes) (2017). • Ley 27424 Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública (2017). 	<ul style="list-style-type: none"> • Ley N° 22.431, Sistema de Protección Integral de los Discapacitados. • Ley 25.644, Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad.
<p><u>A LA ALIMENTACIÓN, VESTIDO Y VIVIENDA ADECUADA</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 5 inciso f). • Carta Mundial del Derecho a la Ciudad, artículo XIII. • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 9º. • Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25. • Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos XI y XXIII. • Convención relativa al Estatuto de los Refugiados, artículo 21. • Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 5. • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11. • Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, artículo 14.2 inciso h. • Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador), artículo 12. • Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 24 y 27 inciso 3. • Convención relativa al Estatuto de los Refugiados, artículo 43.1. • Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 7.6. • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 28. 	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Nacional, artículo 14 bis. • Código Civil y Comercial de la Nación, Capítulo denominado 'Vivienda'. • Ley N° 18.284 Código Alimentario Argentino (1969). • Ley N° 23.767 Políticas Sociales Comunitarias (1990). • Ley 25.724 Programa de Nutrición y Alimentación Nacional (2003). • Ley 26.727 de Trabajo Agrario (2011). • Ley 26.873 Salud Pública (Lactancia Materna. Promoción y Concientización Pública) (2013). • Ley 27.454 Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos (2018). • Ley 27.519 Emergencia Alimentaria Nacional (2019). • Ley 17.594 Sistema de Ahorro y Préstamo para la Vivienda (1967). • Ley N° 21.342 Locaciones Urbanas (1976). • Ley N° 21.581 Fondo Nacional de la Vivienda (1977). • Ley N° 23.073 Vivienda (1984). • Ley N° 23.091 de Locaciones

	<p>Urbanas (1984).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley N° 23.680 Locaciones Urbanas (1989). • Ley N° 24.057 Asociaciones Civiles (1992). • Ley N° 24.374 Inmuebles (1994). • Ley N° 24.441 Financiamiento de la Vivienda y la Construcción (1994). • Ley 24.464 Sistema Federal de la Vivienda (1995). • Ley 25.737 Viviendas (2003). • Ley 25.798 Sistema de Refinanciación Hipotecaria (2003). • Ley 26.062 Sistema de Refinanciación Hipotecaria (2005). • Ley 26.084 Sistema de Refinanciación Hipotecaria (2006). • Ley 26.103 Sistema de Refinanciación Hipotecaria (2006). • Ley 26.158 Ley de Incentivos para la Adquisición y Construcción de Vivienda Única, Familiar y Permanente (2006). • Ley 26.313 Reestructuración de Créditos Hipotecarios Pre-Convertibilidad (2007). • Ley 27.118 Agricultura Familiar (2015). • Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículo 36. • Decreto-Ley 9973/80. • Ley provincial de Acceso Justo al Hábitat N° 14.449 artículo 3.
<p><u>A LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD Y A LA CULTURA</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 22, 26 y 27. • Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos 12, 13 y 22. • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículos 1, 3, 13 y 15. • Constitución Nacional Argentina, artículos 5, 14, 41, 75 incisos 17 y 19 y 125. • Ley federal de educación N° 24.195. • Ley de Educación Nacional N° 26.206.

- Protocolo en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 14.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 1 y 27.
- Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales —Protocolo de San Salvador—, artículo 13.
- Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 28.
- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículos 24 y 30.
- Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales.
- Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.
- Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural.
- Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
- Ley de educación superior nº 24.521.
- Ley 17.604 Educación (Ley De Universidades Privadas) (1967).
- Ley 24.806 Publicidad de la Enseñanza Privada (1997).
- Ley 25.030 Ley de Seguimientos de la Política Educativa Nacional (1998).
- Ley 25.165 Pasantías Educativas.
- Ley 25.575 Programa Vocacionar (2002).
- Ley 25.583 Programas Sociales (2002).
- Ley 25.584 Educación (Prohíbese en los establecimientos de educación pública toda acción institucional que impida el inicio o continuidad del ciclo escolar a alumnas embarazadas) (2002).
- Ley 25.864 Educación (Establecimientos en los que se imparta Educación Inicial, Educación General Básica y Educación Polimodal, o sus respectivos equivalentes. Fijase un ciclo lectivo anual mínimo de ciento ochenta días efectivos de clase) (2004).
- Ley 26.057 Programa Antártico de Educación a Distancia (2005).
- Ley 26.058 Ley de Educación Técnico Profesional (2005).
- Ley 26.075 Educación (Incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología) (2006).
- Ley 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral (2006).
- Ley 26.427 Educación (Créase el Sistema de Pasantías Educativas en el marco del sistema educativo nacional) (2008).

- Ley 27.064 Educación (Regulación y Supervisión de Instituciones de Educación no Incluidas en la Enseñanza Oficial. Disposiciones Generales) (2015).
- Ley N° 23.578 (1988) que aprueba la adhesión al Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM),
- Organismo Especializado Intergubernamental creado por la UNESCO.
- Ley 24.993 (1998) que aprueba el Protocolo de Integración Cultural del Mercosur, suscrito con las Repúblicas Federativa del Brasil, Paraguay y Oriental del Uruguay.
- Ley N° 25.197 Régimen del Registro del Patrimonio Cultural (1999).
- Ley 25.799 Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes (2003).
- Ley 26.155 (2006) que aprueba el Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, adoptado en La Haya — Reino de los Países Bajos— el 14 de mayo de 1954.
- Ley N° 12.665 Creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos (1993).
- Ley N° 25.478 (2001) que aprueba el Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, adoptado en La Haya el 26 de marzo de 1999.
- Ley N° 25.568 que aprueba la Convención sobre Defensa del

		<p>Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las naciones Americanas — Convención de San Salvador — adoptado en Washington el 16 de junio de 1976 (2002).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley 25.743 Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (2003). • Ley 26.522 Servicios de Comunicación Audiovisual (2009). • Ley 27.067 Artes Gráficas Nacionales (2015). • Ley N° 27522 Bienes Culturales (2019).
<p><u>A</u> <u>LA</u> <u>INFORMACIÓN,</u> <u>LA</u> <u>PARTICIPACIÓN</u> <u>LA</u> <u>POLÍTICA,</u> <u>LA</u> <u>CONVIVENCIA</u> <u>PACÍFICA Y</u> <u>EL</u> <u>ACCESO A</u> <u>LA</u> <u>JUSTICIA</u></p>	<p>Derecho a la información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19. • Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13. • Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículos 10 inciso h y 16 inciso e. • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 19. • Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 13 y 17. • Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, artículos 9, 10, 13 y 14. • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 21. 	<p>Derecho a la información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constitución Nacional, artículo 43. • ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. • Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública • Decreto N° 1759 (1972). • art. 268 del Código de Minería Ley 1919 (1886). • art. 8 de la Ley 25.152 Administración de los Recursos Públicos (1999). • Decreto 41/99 Código de Ética de la Función Pública (1999). • Decreto 229/2000 Carta Compromiso Con El Ciudadano (2000). • Ley 25.600 de Financiamiento de Los Partidos Políticos (2002). • Ley 25.675 de Política Ambiental Nacional (2002). • Decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública (2003). • Ley 25.831 Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental (2004). • Acordada 1/2004 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. • Decreto 117/2016 Plan de

Apertura de Datos (2016).	
<p>Derecho a la participación política:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 21. • Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XX. • Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículo 25. • Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 5. • Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 23. • Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 7. • Convención Internacional sobre la Protección de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, artículo 41. • Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 7. • Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 29. 	<p>Derecho a la participación política:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constitución Nacional, artículo 37, 39 y 40. • Decreto N° 2135 que aprueba el Código Electoral Nacional (1883), • Ley N° 23.298 Ley Orgánica de los Partidos Políticos (1985). • Ley 24.747 Iniciativa Legislativa Popular (1996). • Decreto 1246/2000 que garantiza un cupo mínimo de mujeres en los cargos electivos. • Ley 25.432 Consulta Popular (2001). • Ley 25.600 Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (2002). • Ley 26.215 Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (2007). • Ley 26.571 Partidos Políticos (Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral) (2009).
<p><i>Derecho a la convivencia pacífica:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 1 y 26. • Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 38. • Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. 	<p><i>Derecho a la convivencia pacífica:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, artículo 10. • Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes N° 26.061. • Ley 26.206 de Educación Nacional • Ley 26.892 para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.
<p><i>Derecho de acceso a la justicia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 8, 9 y 10. • Declaración Americana de los Derechos y 	<p><i>Derecho de acceso a la justicia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Constitución Nacional, artículos 14, 18 y 43. • Ley 24.946 Ley Orgánica del Ministerio Público


	<p>Deberes del Hombre, artículo XVIII</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. • Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8 y 25. • Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, artículo 15. • Convención de Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad, artículo 13. • “Principios y Directrices de las Naciones Unidas sobre el Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal” • “Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad”, 	<ul style="list-style-type: none"> • Ley N° 25.675 de Política Ambiental Nacional • Ley N° 25.871 de Migraciones, artículo 6. • Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, artículo N° 1. • Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165, artículo 8. • Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres • Ley de Salud Pública N° 26.657, artículo 22. • Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 706. • Ley 27148 del Ministerio Público Fiscal, artículo 1. • Ley 27149 del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, artículo 1. • Ley 27210 de Violencia de Género, artículo 1. • Ley 27372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos artículo 3 inciso a).
<p><u>A ORGANIZARSE, REUNIRSE Y MANIFESTARSE</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículos XXI y XXII. • Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 20. • Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículo 5. • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 21 y 22. • Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículo 8. • Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 15 y 16. • Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 15. 	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Nacional Argentina, artículo 14.
<p><u>EL RESPETO A LAS MINORÍAS Y LA PLURALIDAD ÉTNICA, RACIAL,</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2. • Convención para la Prevención y la 	<ul style="list-style-type: none"> • Constitución Nacional, artículos 16, 25 y 75 inciso 17. • Código Civil y Comercial, artículo 18

SEXUAL CULTURAL Y EL RESPECTO A LOS MIGRANTES	<p>Sanción del Delito de Genocidio, artículo 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley Nº 23.302, artículo 1. • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales artículo 2. • Ley Nº 26160 • Ley 25871 • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 2, 24, 26 y 27. • Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, artículos 1y 2. • Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 2 y 30. • C169 - Convenio sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo del año 1989. • Declaración de las Naciones Unidas sobre las Minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/135 de fecha 18 de diciembre de 1992, artículo 1. • Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, artículo 7. • Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, artículo 4. • Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales • Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, artículo 1. • Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad • Declaración Americana de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, artículos 2 y 5. • Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, artículo 3. • Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, artículo 1. • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 13. • Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son nacionales del país en que viven. • Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración de Santiago sobre principios migratorios • Declaración de Asunción para el Cuadragésimo Cuarto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA: "Desarrollo Con Inclusión Social"
<u>AL DESARROLLO</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 22 y 25. • Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 26. • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11. • Resolución 1515(XV) • Resolución 1710(XVI) • Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social • Declaración sobre el Derecho al Desarrollo • Declaración y el Programa de Acción de Viena • Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes
<u>A UN MEDIO AMBIENTE SANO</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12. • Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. • Protocolo de San Salvador, artículo 11. • Convenio Internacional relativo a la intervención en alta Mar en caso de accidentes que causen una contaminación por hidrocarburos. • Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques 1973 y sus Protocolos Anexos • Protocolo de 1978 relativo al Convenio Internacional para prevenir la Contaminación por los Buques 1973. • Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres • Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres • Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente

	<p>como Hábitat de Aves Acuáticas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convenio de Viena para protección de la Capa de Ozono. • Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono • Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación. • Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente. • Convenio sobre la Diversidad Biológica . • Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en Africa • Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio • Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. • Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR. • Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes • Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático. • Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 3.
<p><u>AL DISFRUTE Y PRESERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ley que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para control de actividades de quema en todo el territorio nacional (ley nº 26562) • Ley que establece el manejo del fuego (ley nº 26815) • ley que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios (ley nº 27279). <ul style="list-style-type: none"> • Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, artículo 25. • Constitución Nacional Argentina, artículo 41 • Ley General del Ambiente N° 26675. • Ley N° 12.161 • Ley N° 13.273 de Defensa, Mejoramiento y Ampliación de Bosques • Ley N° 20.284 - Plan de prevención de situaciones críticas de contaminación atmosféricas • Ley N° 22.351 - Parques Nacionales • Ley N° 22.421 de Conservación de la Fauna • Ley N° 23.724 que aprueba el Convenio de Viena para protección de la Capa de Ozono • Ley N° 23.919 aprobatoria de la

	<p>Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ley Nº 24.051 de Residuos Peligrosos, • Ley Nº 22.428 de Fomento a la Conservación de los Suelos • Ley Nº 24.922 - Régimen Federal de Pesca • Ley Nº 25.612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios • Ley Nº 25.670 de Presupuestos Mínimos para la Gestión y Eliminación de los PCBs • Ley Nº 25.688 -Régimen de Gestión Ambiental de Aguas • Ley Nº 25.916 de Gestión de Residuos Domiciliarios • Ley Nº 26.331 - Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos • Ley Nº 26.639 - Medio Ambiente (Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial).
<p><u>A LA PARTICIPACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANA</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes, artículo 7.5. • Ley Nº 25.675 de Política Ambiental Nacional • Decreto-Ley 8912/77 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la provincia de Buenos Aires. • Ley Nº 14.449 de Acceso Justo al Hábitat de la provincia de Buenos Aires.
<p><u>A LA HERENCIA HISTÓRICA Y CULTURAL</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado y su Reglamentación • Convención sobre Defensa del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las naciones Americanas • Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, • Convención de la UNESCO para la • Constitución Nacional artículos 41 y 75 incisos 17 y 19 • ley Nº 12.665



Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial

- Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, artículo 13
-

3. Concluyendo... ¿es el derecho a la ciudad exigible en Argentina?

A través del análisis de las diversas definiciones del derecho a la ciudad y de la normativa que lo reconoce podemos concluir que la noción de derecho a la ciudad conlleva aparejada la idea de un derecho colectivo de todos los ciudadanos, pero en particular a los grupos vulnerables y desfavorecidos; cuyo eje resulta ser el respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos – político, social, económico y medioambiental– y que aspira, entre otras cosas, a una ciudadanía democrática, liberadora, igualitaria, inclusiva, creadora de nuevos derechos y transformadora.

Es considerado un ‘derecho humano emergente’ por cuanto, y tal como ya hemos visto, si bien como tal puede no haber obtenido un reconocimiento jurídico expreso en instrumentos con fuerza vinculante por parte de la comunidad internacional, podría llegar a tenerlo, constituyendo igualmente una aspiración legítima de la sociedad civil global.

La pregunta que nos realizamos entonces es: ¿es el derecho a la ciudad es exigible en Argentina?

Al respecto Slavin explica que “(l)a caracterización de Emergentes no implica la imposibilidad de ser legal y judicialmente exigibles en forma inmediata, aunque reconoce las dificultades que para ello se presentan” (SLAVIN, 2015).

El derecho a la ciudad es inherente al conjunto de los derechos humanos universalmente aceptados y reconocidos, pero no tiene su mismo estatus jurídico, lo que dificulta su exigencia. Entonces, si bien no es imposible exigir legalmente y judicialmente el derecho a la ciudad en Argentina, el hecho de que no se encuentre positivizado en instrumentos normativos vinculantes representa un obstáculo.

A partir de la tabla realizada en el subtítulo 2.3 del presente, pudimos advertir que el derecho a la ciudad está integrado por derechos correlativos, autónomos y que están positivizados tanto en la legislación nacional como en instrumentos internacionales aprobados por Argentina.

Entonces, la alternativa que proponemos es reclamar en forma individual o colectiva a través de los mecanismos judiciales diseñados para tal efecto, los diversos derechos que componen el derecho a la ciudad, fundado dicho reclamo en la normativa que garantiza cada derecho en particular (la que fuera expuesta en la tabla mencionada).

Sin embargo, la problemática que conlleva dicha alternativa es que los derechos humanos que integran el derecho a la ciudad si bien son autónomos también son interdependientes e indivisibles, por lo que su reclamo de manera individual pierde de vista la perspectiva compleja, global, autónoma e integral que trae aparejada el derecho a la ciudad, ya que este derecho “(...) no es un derecho más. Es el derecho a hacer cumplir los derechos que ya existen formalmente” (SCATOLINI, 2016).

Entonces, para que el derecho a la ciudad no quede simplemente entre meras definiciones que aspiran a su reconocimiento jurídico expreso en el sistema internacional de derechos humanos, y que buscan profundos cambios políticos, económicos, sociales y culturales, resulta necesario sancionar nuevas normas vinculantes que contribuyan a la efectividad del uso y goce del derecho a la ciudad como tal.

Ahora, ¿dicho reconocimiento será condición suficiente para que sea efectivo? Ello aún no lo podemos afirmar pero, siguiendo el análisis de Lefebvre explicado en el punto 2.1 del presente, si bien los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales no son siempre literalmente cumplidos, sirven como vara para evaluar la situación de la sociedad, el carácter democrático de un régimen.

Entonces, lo que sí podemos afirmar es que su reconocimiento en un instrumento vinculante permitirá remover un obstáculo en cuanto a su exigibilidad.

Mientras tanto, la gran cantidad de estudios y análisis del derecho a la ciudad efectuados desde su implantación por Lefebvre hasta la actualidad y el reconocimiento de dicho derecho en distintos instrumentos internacionales permiten que el mismo sea

(...) una guía para la acción en el presente, para la interpretación de la realidad y para la concepción de las políticas urbanas (...) un escenario de futuro deseable, una esperanza de sociedad justa y libre, de iguales y de solidarios, de respeto mutuo y de respeto al medio físico, de asunción de la historia y de la memoria ciudadanas y de un horizonte que nos orienta en la acción. No es una utopía, o lo es en palabras de Eduardo Galeano, “es lo que nos anima a andar” (BORJA, 2017).

4. Bibliografía

Guillén Lanzarote, A. (2011). El derecho a la ciudad, un derecho humano emergente. **Serie Derechos Humanos Emergentes 7: El derecho a la ciudad.**

Borja, J. (2010). **Luces y sombras del urbanismo de Barcelona.** Barcelona: UOC.

Borja, J. (2013). **Revolución urbana y derechos ciudadanos** (2014 ed.). Argentina: Editorial Café de las Ciudades.

Borja, J. (2017). Contra la injusticia espacial, por los derechos ciudadanos, la igualdad y la sostenibilidad. **Folios. Reflexión y palabra abierta. El derecho a la ciudad**, 4-20.

Carta de Derechos Humanos de Gwangju. (2012). Recuperado el 25 de 09 de 2018, de [tps://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju%20Guiding%20Principles%20for%20Human%20Rights%20City%20adopted%20on%2017%20May%202014_ES_MGG.pdf](https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Gwangju%20Guiding%20Principles%20for%20Human%20Rights%20City%20adopted%20on%2017%20May%202014_ES_MGG.pdf)

Carta de Derechos y Responsabilidades de Montreal. (2006). Recuperado el 02 de 05 de 2018, de http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CHARTER_MTL_FR/MEDIA/DOCUMENTS/CARTA-DE-DERECHO-Y-RESPONSABILIDADES.PDF

Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad. (2010). Recuperado el 25 de 09 de 2018, de <https://www.equipopueblo.org.mx/descargas/Carta%20de%20la%20Ciudad%20de%20Mexico%20por%20el%20Derecho%20a%20la%20Ciudad.pdf>

Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. (2000). Recuperado el 02 de 05 de 2018, de <https://www.idhc.org/arxius/reerca/1417085043-CartaEuropea.pdf>

Carta Mundial del Derecho a la Ciudad. (2004). Recuperado el 02 de 05 de 2018, de http://www.ugr.es/~revpaz/documentacion/rpc_n5_2012_doc1.pdf

Carta-Agenda Mundial de Derechos Humanos en la Ciudad. (2011). Recuperado el 02 de 05 de 2018, de https://www.uclg-cisdp.org/sites/default/files/Carta_Agenda_Mundial_DDHH_Ciudad_CGLU_0.pdf

Constitución Política de la Ciudad de México. (2017). México.

Constitución Política de la República Federativa de Brasil. (1988). Recuperado el 26 de 09 de 2018, de <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/br/br117es.pdf>

Correa Montoya, L. (2010). ¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos. **Territorios**, 22, 125-149.

Correa Montoya, L. (octubre de 2010). Algunas reflexiones y posibilidades del derecho a la ciudad en Colombia. **Revista Jurídica de la Universidad de Palermo**, 31-74.

David, H. (2013). **Ciudades rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana.** (2013 ed.). (M. Juanmari, Trad.) Madrid: Akal.

Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes. (2004). Recuperado el 02 de 05 de 2018, de <https://www.idhc.org/arxius/recerca/1416309302-DUDHE.pdf>

Guillén Lanzarote, A. (2011). El derecho a la ciudad, un derecho humano emergente. (I. d. Catalunya, Ed.) **Serie Derechos Humanos Emergentes 7: El derecho a la ciudad**.

Harvey, D. (1977). **Urbanismo y Desigualdad Social** (1989 ed.). Madrid: Siglo XXI de España Editores.

Harvey, D. (2013). **Ciudades Rebeldes. Del derecho de la ciudad a la revolución urbana**; (2014 ed.). Madrid: Akal.

Harvey, D. (2018). **Justicia, Naturaleza y la Geografía de la diferencia**. (J. M. Amoroto, Trad.) Ecuador: Instituto de Altos Estudios Nacionales.

Lefebvre, H. (1968). **El derecho a la ciudad**. Barcelona, España: Ediciones Península.

Lefebvre, H. (1976). **Espacio y Política. El Derecho a la Ciudad II**. Barcelona: Ediciones Península.

Ley 388. (1997). Colombia.

Ley de Acceso Justo al Hábitat N° 14449. (2012). Recuperado el 08 de 10 de 2018, de <https://www.cels.org.ar/web/publicaciones/ley-de-acceso-justo-al-habitat-guia-para-su-aplicacion/>

Martínez, A. (2015). **TESIS DOCTORAL: El derecho a la ciudad y su naturaleza jurídico-urbanística. Los supuestos de Barakaldo y Milton Keynes**. Madrid.

Molano Camargo, F. (2016). El derecho a la ciudad: de Henri Lefebvre a los análisis sobre la ciudad capitalista contemporánea. **Folios**, 2(44), 3.19.

Scatolini, J. L. (2016). Revisando la agenda urbana: una mirada desde la Ley de Acceso Justo al Hábitat. **Derecho a la Ciudad. Sin justicia social urbana no hay ciudadanía.**, 395.

Slavin, P. (2015). Apuntes para la (re)construcción del Derecho a la Ciudad. En **XIX Jornadas de Investigadores y Becarios en Ciencias Jurídicas y Sociales** (págs. 215-248). Mar del Plata.

Soja, E. (2014). **En busca de la justicia espacial**. Valencia: Tirant Humanidades.

Soja, E. W. (2000). **Postmetrópolis: estudios críticos sobre las ciudades y las regiones** (2008 ed.). Madrid, España: Ed. Traficantes de Sueños.

Velásquez Carrillo, F. (2007). **Conversaciones sobre el Derecho a la Ciudad** (Primera ed.). (F. E. Velásquez Carrillo, Ed.) Bogotá, Colombia: Gente Nueva Editorial.

Trabalho enviado em 18 de junho de 2020
Aceito em 18 de junho de 2020